



Rama Judicial del Poder Publico
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Barranquilla, catorce (14) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

Radicado	08-001-3333-006- 2018-00288 -00
Medio de control	Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante	Antonio María Muskus Gracia
Demandado	Unidad de Gestión y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP, Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.
Jueza	Lilia Yaneth Álvarez Quiroz

I.- PRONUNCIAMIENTO.

Procede el Despacho a dictar sentencia dentro de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por el señor Antonio María Muskus Gracia contra la Unidad de Gestión y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP, y la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones, de conformidad con los artículos 181 y 187 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos:

II.- ANTECEDENTES.

2.1. Pretensiones.

Pretende la parte demandante que se hagan las siguientes declaraciones y condenas:

- Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos:
 - Resolución SUB192103 de 12 de septiembre de 2017, proferido por Colpensiones
 - Resolución RDP 035526 de 14 de septiembre de 2017.
 - Resolución RDP 030956 de 1 de agosto de 2017
 - Resolución RDP 026221 de 27 de junio de 2017
 - Proferidos por la UGPP
- A título de restablecimiento se ordene a la Nación- Unidad de Gestión y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP, y a la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones:
 - Reconocer y pagar en favor del señor Antonio María Muskus Gracia la pensión con fundamento en el artículo 10 de 546 de 1971, teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados por el actor en su último año de servicio.

Indexar el valor de la primera mesada pensional y/o actualizar el salario tenido como base para liquidar la pensión y pagar el retroactivo que se generen.

Reconocer y pagar los intereses moratorios causados desde que la obligación se hizo exigible hasta la fecha del pago efectivo de los mismos.

En el evento en que se nieguen los intereses moratorios, se indexe retroactivo pensional que se genere.

Se liquiden los intereses comerciales y moratorios si no se efectúa el pago en forma oportuna tal como lo ordena el artículo 195 de la ley 1437 de 2011.

Se actualice la condena respectiva de conformidad con lo previsto en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, aplicando los ajustes de valor (indexación) desde la fecha en que debió pagarse la sanción moratoria hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que le ponga fin al proceso.

Se condene al pago de agencias judiciales.

Se imponga cumplimiento de la sentencia dentro del término establecido en el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011.

2.2. Hechos.

El Despacho resume los hechos expuestos de la siguiente manera:

1. El señor Antonio María Muskus Gracia, nació el 14 de noviembre de 1933, al momento de la entrada en vigencia la Ley 100 de 1993 tenía 49 de años de edad.
2. Trabajó al servicio de la Rama Judicial, de manera intermitente, entre el 14 de febrero de 1959 y 31 de julio de 1985.
3. Al servicio del Ministerio Público trabajó entre el 1 de septiembre de 1995 hasta el 22 de abril de 1997.
4. El régimen aplicable es el contenido en decreto 546 de 1971.
5. El 14 de noviembre de 1998 el actor cumplió la edad de retiro forzoso por lo que solicitó la pensión de vejez ante Colpensiones el 23 de mayo de 2016, radicado No. 5204367.

6. Mediante Resolución No. GNR 5716 de 22 de febrero de 2017 Colpensiones se declaró incompetente para resolver la solicitud pensional y en consecuencia ordenó remitir la documentación obrante en el expediente administrativo del señor Muskus a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal –UGPP.

7. Mediante Resolución RDP026221 de 27 de junio de 2017, notificado el 4 de julio de la misma anualidad, la UGPP resolvió de modo negativo la solicitud, por no acreditar el requisito de semanas cotizadas.

8. El 17 de julio con escrito referenciado 201760052164052 se interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la mencionada resolución, solicitando la aplicación del régimen establecido en el decreto 546 de 1971.

9. Con Resolución RDP de 1º de agosto de 2017, la UGPP resolvió negar el recurso de reposición, concediendo la apelación.

10. Con Resolución RDP 035526 de 14 de septiembre de 2017, la UGPP revocó las decisiones anteriormente señaladas y ordenó remitir a Colpensiones por competencia, la solicitud de reconocimiento pensional.

11. Colpensiones mediante resolución SUB19213 de 12 de septiembre de 2017 resolvió negar el reconocimiento pensional.

2.3. Normas Violadas y Concepto de Violación.

Considera violados los siguientes artículos:

Constitucionales: Artículo 1, 2, 6, 13, 23, 48, 53, 209.

Legales: Ley 100 de 1993

Decreto 546 de 1971

Considera vulnerado el artículo 13 de la Constitución Política por las decisiones acusadas pues riñe con los postulados del Estado social de derecho y los fines de estado.

Respecto de los artículos 48 y 53 de la Constitución Política aduce que, los entes demandados, desconocen el derecho a la reliquidación, los mínimos laborales, al principio de favorabilidad.

Del artículo 209 de la Constitución Política, afirma que las autoridades públicas deben ejercer sus funciones en observancia de principios como el de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad e imparcialidad.

Asimismo, con la expedición de las Resoluciones vulneran el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el 10 del Decreto 546 de 1971, pues en ella se indica que la edad para acceder a la pensión, el tempo de servicio y el momento de pensión será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentra afiliados, por lo tanto, al actor le es aplicable el artículo 10 del Decreto de 546 de 1971. Trayendo como referencia sentencias del Consejo de Estado.

2.4 Contestación

2.4.1. Unidad de Gestión y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP.

En su contestación se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda. Manifestó que, el señor Antonio María Muskus Gracia no logró acreditar el requisito de semanas cotizadas, por cuanto solo acredito 6.630 días laborados correspondientes a 947 semanas por lo cual se negó lo deprecado. Así mismo, el 27 de abril de 2018 solicitó el reconocimiento y pago de una indemnización sustitutiva de una pensión de vejez, radicada con el No. SOP 201801015053.

Con RDP 024251 de 26 de junio de 2018 se reconoció y ordenó el pago de una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez por una sola vez al actor por la suma de \$23.851.710. La cual se encuentra ajustada a derecho.

Propone como excepciones inexistencia de derecho, cobro de lo no debido, pago, compensación, prescripción, falta de legitimación en la causa por pasiva y la genérica.

2.4.2 Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones

En su contestación se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda. Manifestó que la Resolución SUB 192103 de 12 de septiembre de 2017 expedida por Colpensiones se encuentra ajustada a la Constitución Política y demás normas concordantes. Trayendo como sustento la sentencia SU 258 de 2013 y la fijación de subreglas para el IBL.

Propuso como excepciones legalidad del acto administrativo.

2.5 Actuación Procesal

La demanda fue presentada el 26 de febrero 2018, ante la Oficina de Servicios de los Juzgados Administrativos de esta ciudad, dirigida al Tribunal Administrativo. Con auto de 10 de julio de 2018, el Despacho 2 Sala Decisión Oral Sección B de esa Corporación

declaró que la competencia para conocer el presente proceso la tienen los jueces administrativos y ordenó la remisión. Por reparto fue asignada a este estrado judicial. Con auto de 10 de septiembre de 2018 fue admitida y notificado el auto admisorio en debida forma a las entidades demandadas, que presentaron sus respectivas contestaciones con la promoción de excepciones; a las cuales se dio traslado mediante fijación en lista el día 19 de febrero de 2019.

Surtido el trámite de traslado, con auto de 15 de julio de 2019 fue señalada fecha y hora para el desarrollo de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del C.P.A.C.A. celebrándose el 14 de agosto de esa anualidad., en la cual se declaró probada la excepción previa de ineptitud de demanda, por proposición jurídica incompleta y el no agotamiento de la vía administrativa, decretando la terminación del proceso. Decisión que fue apelada por la parte actora, por lo que se remitió al superior para la resolución del recurso.

Con providencia de fecha 5 de marzo de 2020 el Tribunal de lo Contencioso administrativo sección C revocó la decisión, por lo que con auto calendado 11 de marzo de 2020 se dispuso obedecer y cumplir lo resuelto por el superior. Seguidamente, en razón a que las pruebas obrantes eran netamente documentales y suficientes para la resolución del asunto planteado, se dispuso su incorporación y se ordenó la presentación de alegatos por escrito, en cumplimiento del Decreto 806 de 2020.

2.6 Alegaciones

2.6.1. Parte Demandante.

El apoderado de la parte demandante manifiesta que, en el proceso se acreditaron lo hechos narrados de la demanda. Que el último sueldo devengado por el actor ascendía a la suma de Setecientos Treinta y Siete Mil Quinientos (\$737.500, 00).

Que debido a que el demandante laboró al servicio de la Rama Judicial y del Ministerio Público durante toda su vida laboral, la norma aplicable es aquella que, de manera especial establecía el régimen prestacional de ese tipo servidores públicos, antes de la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, pues, éste es beneficiario del régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la norma objeto de comentario.

Así las cosas, la prestación reclamada es la contenida en el artículo 10 del decreto 546 de 1971, que dispone que los que lleguen o hayan llegado a la edad de retiro forzoso dentro del servicio judicial o del Ministerio Público, sin reunir los requisitos; exigidos para una pensión ordinaria de jubilación, pero habiendo servido no menos de 5 años continuos en tales actividades, tendrán derecho a una pensión de vejez equivalente a un 25% del último

suelo devengado, más un 2% por cada año servido.” Por lo tanto, el demandante adquirió el derecho a devengar su pensión a partir del 14 de noviembre de 1998, fecha en la que cumplió la edad de retiro forzoso -65 años para la época-, dado que laboró al servicio de la Rama Judicial y el Ministerio Público más de 18 años, de los cuales, el periodo comprendido entre enero de 1973 y julio de 1985 -más de 12 años-, supera el mínimo de años continuos de servicio exigidos para ser beneficiarios de la pensión especial de jubilación contemplada en el precepto antes anotado.

Afirma que el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Atlántico -siguiendo la línea argumentativa dispuesta por su órgano de cierre-, vienen reconociendo prestaciones como la reclamada en esta oportunidad.

2.6.2. Parte demandada

La Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones y la Unidad de Gestión y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP no presentaron alegaciones en el término otorgado.

2.7 Ministerio Público

La representante del ministerio público no rindió concepto en el presente asunto.

III.- CONTROL DE LEGALIDAD.

El Despacho encuentra que no existen vicios que puedan acarrear nulidades, por lo que se da por satisfecho el control de legalidad que se debe ejercer una vez se ha agotado cada etapa del proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 207 del CPACA

IV.- CONSIDERACIONES.

4.1. Problema Jurídico.

En el presente asunto se deberá determinar si para el reconocimiento pensional del señor Antonio María Muskus Gracia se debe aplicar el artículo 10 del Decreto 546 de 1971, por ser beneficiario del régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Para tal efecto se realizará el análisis de legalidad de la Resolución SUB192103 del 12 de septiembre de 2017 proferida por Colpensiones, estudiando los cargos propuestos en la demanda, estos haber sido proferidas con violación a normas constitucionales y legales.

4.2. Tesis.

Como se expondrá en líneas posteriores al demandante no le asiste razón pues como se evidencia en el acervo probatorio allegado al expediente, al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, el señor Muskus Gracia no era beneficiario del régimen especial previsto en el Decreto 546 de 1971 para los servidores de la Rama Judicial y Ministerio Público, toda vez que, a pesar que laboró en ella en algunos períodos, no se encontraba para el 1 de abril de 1994 vinculado a la Rama Judicial y por ende no contaba con un derecho adquirido o una expectativa razonable para que se reconociera su derecho pensional de vejez, conforme a lo previsto en el artículo 10 del mencionado Decreto.

4.3. Marco Normativo y Jurisprudencial

En lo que a la pensión de vejez se refiere, bien vale la pena recordar que en un principio, la Ley 50 de 1886¹ en su artículo 11 estableció que la «pensión de jubilación» se debía reconocer a los empleados civiles que desempeñaban destinos o empleos de manejo, judiciales o políticos durante 20 años, siempre que se hubieran inutilizado en el servicio y no tuvieran medios para procurarse la subsistencia o si eran mayores a 60 años; igualmente, si no eran rebeldes en contra del gobierno ni sindicatos como tales o si no habían sido acusados de prevaricadores.

Transcurridas varias décadas del anterior antecedente, la Ley 6ª de 1945² en el artículo 17 dispuso que los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarían de la prestación denominada «*pensión vitalicia de jubilación*», cuando llegaran a 50 años de edad, después de 20 años de servicio continuo o discontinuo.

A la par, la Ley 65 de 1946³ en el artículo 3 ordenó que la «*pensión mensual vitalicia de jubilación*», de que trata el inciso b) del artículo 17 de la Ley 6ª. de 1945, sería equivalente a las dos terceras partes del promedio de los salarios devengados en el último año de servicios.

Para el año de 1967, cuando el Instituto de Seguros Sociales empezó a asumir el reconocimiento y pago de las pensiones de los trabajadores privados, la normativa se refirió a la «*pensión mensual vitalicia de jubilación o de vejez*» y «*pensión por vejez*», como puede observarse en el Decreto 3135 de 1968, artículos 27 y 29:

Artículo 27. Pensión de jubilación o vejez. El empleado público o trabajador oficial que sirva veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años si es varón, o 50 si es mujer, tendrá derecho a que por la respectiva entidad de previsión le pague una pensión

¹«Que fija reglas generales sobre concesión de pensiones y jubilaciones.

² «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo

³ «Por la cual se modifican las disposiciones sobre cesantía y jubilación y se dictan otras

mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio.

Artículo 29. Pensión de retiro por vejez. A partir de la vigencia del presente decreto el empleado público o trabajador oficial que sea retirado del servicio por haber cumplido la edad de 65 años y no reúna los requisitos necesarios para tener derecho a pensión de jubilación o invalidez tendrá derecho a una pensión de retiro por vejez, pagadera por la respectiva entidad de previsión equivalente al veinte por ciento de su último sueldo devengado y un dos por ciento más por cada año de servicios siempre que carezca de recursos para su congrua subsistencia. Esta pensión podrá ser inferior al mínimo legal.

A su vez, el artículo 68 del Decreto 1848 de 1969 preceptuaba:

Artículo 68. Todo empleado oficial que preste o haya prestado sus servicios durante veinte (20) años, continua o discontinuamente, en las entidades, establecimientos o empresas señalados en el artículo 1º de este Decreto, tiene derecho a gozar de pensión de jubilación al cumplir cincuenta y cinco (55) años de edad, si es varón, o cincuenta (50) años de edad si es mujer.

Por su parte, el Decreto 2879 de 1985, por el cual se aprobó Acuerdo 029 de 1985 del ISS, hizo alusión a la «pensión por vejez» en el artículo 1.º ⁴

Luego, la Ley 33 de 1985⁵ hizo referencia a la «pensión de jubilación», a la que tenían derecho los empleados oficiales, 82 y dispuso lo siguiente:

Artículo 1º. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio...

A su turno, el artículo 7º de la Ley 71 de 1988 «Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones», señaló lo siguiente:

Artículo 7.º A partir de la vigencia de la presente Ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer. El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las entidades involucradas.

⁴ Artículo 1. La pensión mensual de Invalidez o de Vejez se integrará así: a) Con una cuantía básica igual al cuarenta y cinco por ciento (45%) del salario mensual de base, y b) Con aumentos equivalentes al tres por ciento (3%) del mismo salario mensual de base por cada cincuenta (50) semanas de cotización que el asegurado tuviere acreditadas con posterioridad a las primeras quinientas (500) semanas de cotización. [...] La pensión de Vejez o de Invalidez así integrada, no podrá en ningún caso exceder del 90% del salario mensual de base teniendo en cuenta para su liquidación. En el caso que resulte inferior al salario mínimo legal vigente, se reajustará a su valor. [...]

⁵ «Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público». Artículo 1. «- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio»

Más tarde, la Ley 100 de 1993, en su propósito por unificar el sistema general de seguridad social, en sus artículos 13⁶, 31⁷ y 76⁸, entre otros, igualó el lenguaje, al disponer que la contingencia de la vejez en todos los casos debe ser cubierta con la «pensión de vejez», independiente que se trate de trabajadores privados o de servidores públicos.

Del régimen de transición⁹.

La Ley 100 de 1993, en su artículo 36, estableció el **régimen de transición** como un mecanismo de protección frente al impacto del tránsito legislativo en materia pensional para quienes no hubieren consolidado el derecho a la pensión durante la vigencia normativa anterior, pero que estaban próximos a cumplir los requisitos, caso en el cual se les mantendrían algunos presupuestos para acceder a la pensión en condiciones particulares, más favorables y diferentes frente a quienes fueran incluidos al Sistema General de Pensiones. Así dice la norma:

ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. *La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014*, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.*

*La **edad** para acceder a la pensión de vejez, el **tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas**, y el **monto** de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, **será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados**. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.*

Es dable destacar que la consecuencia de ser beneficiario de la transición prevista en el artículo en comento, es que se tenga en cuenta al momento de estudiar el reconocimiento del derecho pensional, los requisitos establecidos en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados, referidos a la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de

⁶ Artículo 13. «CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. El Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes características: [...] c. Los afiliados tendrán derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones y de las pensiones de invalidez, de vejez y de sobrevivientes, conforme a lo dispuesto en la presente ley. [...]».

⁷ Artículo 31. «CONCEPTO. El régimen de Prima Media con Prestación Definida es aquel mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, o una indemnización, previamente definidas, de acuerdo con lo previsto en el presente Título».

⁸ Artículo 76. «El seguro de vejez a que se refiere la Sección Tercera de esta ley, reemplaza la pensión de jubilación que ha venido figurando en la legislación anterior. Para que el Instituto pueda asumir el riesgo de vejez en relación con servicios prestados con anterioridad a la presente ley, el patrono deberá aportar las cuotas proporcionales correspondientes».

⁹ CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ, Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veinte (2020), Radicación número: 13001-23-33-000-2014-00370-01(0504-17)

servicios o el número de semanas cotizadas, y la forma de liquidar el ingreso base de liquidación de la pensión¹⁰.

Ahora bien, es preciso citar lo dispuesto por el Decreto 546 de 1971 “Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, del Ministerio Público y de sus familias”, en relación con la pensión de vejez por retiro forzoso que el actor considera le es aplicable.

Decreto 546 de 1971. Artículo 10. *Los funcionarios a que se refiere este Decreto que lleguen o hayan llegado a la edad de retiro forzoso dentro del servicio judicial o del Ministerio Público, sin reunir los requisitos exigidos para una pensión ordinaria de jubilación, pero habiendo servido no menos de 5 años continuos en tales actividades, tendrán derecho a una pensión de vejez equivalente a un 25% del último sueldo devengado, más un 2% por cada año servido.*

En Sentencia de Unificación CE-SUJ-S2-021-20 de fecha 11 de junio de 2020, la Sección Segunda del Consejo de Estado unificó jurisprudencia en el régimen de empleado o funcionarios de la Rama Judicial o del Ministerio Público así:

De lo expuesto anteriormente se extraen las siguientes reglas de unificación de la jurisprudencia en el tema puesto a consideración:

4.1. El funcionario o empleado de la Rama Jurisdiccional o del Ministerio Público beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 adquiere el derecho a la pensión de jubilación, siempre que se acrediten los siguientes presupuestos:

i) Para el 1.º de abril de 1994, cuando cobró vigencia la Ley 100 de 1993 en el ámbito nacional o para el 30 de junio de 1995 cuando empezó a regir en el ámbito territorial, tenga: a) 40 años de edad si es hombre, 35 años de edad si es mujer o, b) 15 años o más de servicios efectivamente cotizados.

ii) Reúna además los requerimientos propios del régimen de la Rama Judicial y del Ministerio Público estipulados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 para consolidar el estatus pensional que son: a) el cumplimiento de la edad de 50 años si es mujer, o de 55 años si es hombre; b) el tiempo de 20 años de servicios, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto, que tuvo lugar el 16 de julio de 1971;283 c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo debieron ser exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades.

iii) Por tanto, esa pensión se le debe reconocer con los elementos del régimen anterior consagrados en el artículo 6.º del Decreto 546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años si es mujer, de 55 años si es hombre; b) el tiempo de servicios de 20 años, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo debieron ser exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades; d) la tasa de reemplazo del 75%, e) el ingreso base de liquidación de que tratan los artículos 21 y 36, inciso 3.º, de la Ley 100 de 1993, según el caso, es decir, si le faltare más de 10 años, será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión actualizados anualmente con base en la IPC certificado por el DANE, si faltare menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será: (i) El promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) El cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior actualizado anualmente con base en IPC certificado por el DANE; y con los factores de liquidación contemplados por el artículo 1.º del Decreto 1158 de 1994 al igual que por los artículos 14 de la Ley 4ª. de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996;284 1.º

¹⁰ CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA SUBSECCION “B”
Consejero ponente: GERARDO ARENAS MONSALVE Bogotá, D.C., doce (12) de abril de dos mil doce (2012).

del Decreto 610 de 1998; 1.º del Decreto 1102 de 2012; 1.º del Decreto 2460 de 2006; 1.º del Decreto 3900 de 2008; y 1.º del Decreto 383 de 2013, según se trate de magistrados o empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público, siempre que respecto de ellos se hubieren realizado las cotizaciones respectivas.

4.4. Caso Concreto

4.4.1. Lo probado en el proceso.

- Al señor Antonio María Muskus Gracia nació el 14 de noviembre de 1933¹¹.

- El señor Antonio María Muskus Gracia estuvo vinculado a la Rama Judicial en los siguientes períodos:

Desde el 14 de febrero de 1959 a 21 de abril de 1960.

Desde el 11 de junio de 1962 a 15 de febrero de 1963

Desde el 2 de agosto de 1963 hasta el 16 de enero de 1966

Desde el 28 de marzo de 1973 hasta el 31 de julio de 1985.

En el cargo de Magistrado de Tribunal Superior de Justicia de Montería¹²

- En la Personería Distrital de Barranquilla el señor Antonio María Muskus Gracia estuvo vinculado, en los siguientes períodos¹³ así:

Desde 1 de septiembre de 1995 hasta el 30 de diciembre de 1996 en el cargo de Asesor de Personería delegada.

Desde 3 de febrero de 1997 hasta el 22 de abril de 1997 en el cargo de Profesional especializado grado 20.

- El demandante, por conducto de apoderado, presentó solicitud de reconocimiento pensional de vejez a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones el 23 de mayo de 2016¹⁴.

¹¹ Cédula de ciudadanía del señor Antonio María Muskus García No. 891.451 expedida en Cartagena y Registro civil de nacimiento contenido en 2 folios, página de 35 y 36 del Archivo Anexos2.

¹² Certificado laboral expedido por el Coordinador del área de Talento Humano de la dirección ejecutiva seccional de administración judicial de Montería- Córdoba- Certificados de información laboral – de Periodos de vinculación para Pensiones y Bonos Pensionales. Folios de la página 3 a la 16 del archivo nominado Anexos1. Allegados como anexos de la demanda.

¹³ Certificados de información laboral de Periodos de vinculación para Pensiones y Bonos Pensionales (formatos CLEB 1,2,3). Folios de la página 19 al 21 del archivo nominado Anexos1. Allegados como anexos de la demanda.

¹⁴ Escrito de solicitud de fecha 29 de abril de 2016 radicado el 23 de mayo de 2016 con radicado 2016_5204367, página 22-23 de archivo nominado Anexos1.

-. El 10 de abril de 2017 se notifica respuesta negativa, emitida por Colpensiones, a la solicitud de reconocimiento pensional¹⁵.

-. Con Resolución número GNR 57126 del 22 de febrero de 2017 Colpensiones declaró la falta de competencia para resolver una solicitud y se remite al Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal- UGPP¹⁶. Notificado el 4 de julio de 2017¹⁷.

-. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social con Resolución RDP 026221 de 27 de junio de 2017 dio respuesta negativa a la solicitud de reconocimiento pensional de vejez, por la falta de cumplimiento de requisitos¹⁸.

-. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social con Resolución RDP 030956 de 1 de agosto de 2017¹⁹, resolvió confirmar la decisión de la Resolución RDP 026221 de 27 de junio de 2017 y concede el recurso de apelación. La cual fue notificada por aviso²⁰.

-. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social con Resolución RDP 035526 de 14 de septiembre de 2017²¹, resolvió revocar la decisión de la Resolución RDP 026221 de 27 de junio de 2017 en el trámite de apelación por falta de competencia, ordenando su remisión a Colpensiones. La cual fue notificada el 25 de septiembre de 2017²².

-. Con Resolución SUB 192103 de 12 de septiembre de 2017 Colpensiones resolvió el trámite pensional de vejez del señor Antonio María Muskus Gracia, negando la solicitud²³.

-. Como independiente cotizó²⁴:

Desde el 1° de enero de 1998 hasta el 9 de enero de 1998

Desde el 1° de mayo de 2007 hasta el 30 de junio de 2007.

¹⁵ Constancia de notificación de respuesta el 10 de abril de 2017, contenido en 1 folio, página 24 del Archivo Anexos1.

¹⁶ Resolución GNR 57126 de 22 de febrero de 2017 contenida en 3 folios que va de la página 2 a la 6 del Archivo nominado Anexos2

¹⁷ Acta de notificación contenida en 1 folio, página 8 del Anexos2.

¹⁸ Resolución RDP 026221 de 27 de junio de 2017 de la UGPP contenida en 3 folios, en la páginas 9 a 12 del archivo nominado Archivo2.

¹⁹ Acto administrativo de 4 folios de la página 14 a la 17 del archivo nominado Anexo2

²⁰ Constancia de notificación por aviso dirigida al apoderado, en la página 18 y 19 del archivo ominado Anexo2

²¹ Acto administrativo de 7 folios de la página 20 a la 26 del archivo nominado Anexo2

²² Constancia de notificación. Folio 1 página 27 del archivo Anexo2.

²³ Acto administrativo contenido en 7 folios de la página 28 a la página 34 del archivo nominado Anexo2.

²⁴ Resolución SUB 192103 de 12 de septiembre de 2017

4.4.2. Análisis crítico de las pruebas frente al marco jurídico

En el *sub iudice* el señor Antonio María Muskus Gracia solicita se le reconozca la pensión de vejez estipulada en artículo 10 del decreto 546 de 1971 por ser beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la ley 100 de 1993.

Es menester señalar que, el régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993 se creó para proteger las expectativas legítimas que tenían los trabajadores afiliados al régimen de prima media con prestación definida a la fecha de su entrada en vigencia y que estuvieran próximos a pensionarse, esto es aquellos empleados y trabajadores que a la fecha de su entrada en vigencia contaran con 35 años de edad o más si son mujeres, o con 40 si son hombres, o 15 años o más de servicios cotizados. Por lo que basta con reunir cualquiera de los requisitos anteriores para tener el derecho al régimen de transición.

En efecto, en primer lugar se pudo establecer que el señor Antonio María Muskus Gracia se hallaba dentro del régimen de transición indicado en la Ley 100 de 1993, pues reunía uno de los presupuestos exigidos en la norma legal, concretamente el requisito de edad al contar con 60 años de edad a la fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones establecido en la referida norma para los empleados públicos del orden nacional (artículo 151).

Así las cosas, al revisar los requisitos para el reconocimiento pensional, se pudo establecer que, el actor estuvo vinculado con la Rama judicial desempeñando el cargo de Magistrado de Tribunal Superior de Justicia de Montería en los siguientes períodos:

Desde el 14 de febrero de 1959 a 21 de abril de 1960.

Desde el 11 de junio de 1962 a 15 de febrero de 1963

Desde el 2 de agosto de 1963 hasta el 16 de enero de 1966

Desde el 28 de marzo de 1973 hasta el 31 de julio de 1985.

Y con la Personería Distrital de Barranquilla en los siguientes:

Desde 1 de septiembre de 1995 hasta el 30 de diciembre de 1996 en el cargo de Asesor de Personería delegada.

Desde 3 de febrero de 1997 hasta el 22 de abril de 1997 en el cargo de Profesional especializado grado 20.

Durante el lapso comprendido entre el 1 de agosto de 1985 a 30 de agosto de 1995 no obra prueba de que estuviera vinculado al sector público o privado y por ende afiliado a una entidad de previsión.

Se tiene entonces, tal y como se evidencia en el acervo probatorio allegado al expediente que al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, el señor Antonio María Muskus Gracia por su edad era beneficiario del régimen de transición, siendo aplicable el régimen que al que se encontraba afiliado, para la cual debía cumplir con lo dispuesto en la regulación vigente²⁵ para el reconocimiento pensional de vejez.

Sin embargo, para esta judicatura el régimen especial previsto en el Decreto 546 de 1971 para los servidores de la Rama Judicial, no le es aplicable al demandante pues a pesar de que laboró con ésta en algunos períodos, para el 1 de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, no se encontraba vinculado a la Rama Judicial y por ende no contaba con un derecho adquirido o una expectativa razonable para que se reconociera su derecho pensional de vejez, máxime, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 del mencionado Decreto. Pues se itera, el régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993 se creó para proteger las expectativas legítimas que tenían los trabajadores afiliados al régimen de prima media con prestación definida a la fecha de su entrada en vigencia y que estuvieran próximos a pensionarse.

De lo anterior, se puede concluir que, para ser aplicable el régimen contemplado en el Decreto 546 de 1971, es que, para la fecha de retiro forzoso éste o fecha del establecimiento del régimen de transición, el actor estuviese vinculado a la Rama Judicial, por ser un régimen especial, pues así lo contempla la mencionada norma, empero de lo probado en el proceso se tiene que, para esa data, el actor no hacía aportes a una entidad de previsión, de lo que se infiere que no encontraba vinculado al sector público o privado, por lo tanto el régimen pensional allí contenido no le es aplicable, así como el pretendido artículo 10.

En razón a lo anterior, la parte demandante no logró desvirtuar la legalidad del acto administrativo demandado, esto es, la Resolución SUB192103 del 12 de septiembre de 2017 proferida por Colpensiones, lo que fuerza a denegar las pretensiones.

V. COSTAS.

Este Despacho se abstendrá de condenar en costas a la parte vencida, teniendo en cuenta que no asumió en el proceso una conducta que la hiciera merecedora a esa sanción, tales como, temeridad, irracionalidad absoluta, dilación sistemática del trámite o deslealtad, máxime cuando la causación de las mismas tampoco aparece demostrada en el presente asunto.

²⁵ Decreto 2879 de 1985, Ley 71 de 1988 y sus reglamentaciones

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

VI.- FALLA

PRIMERO: DENIÉGUESE las súplicas de la demanda, en concordancia con lo expuesto en esta providencia

SEGUNDO Sin costas, de conformidad con el artículo 188 del C.P.A.C.A.

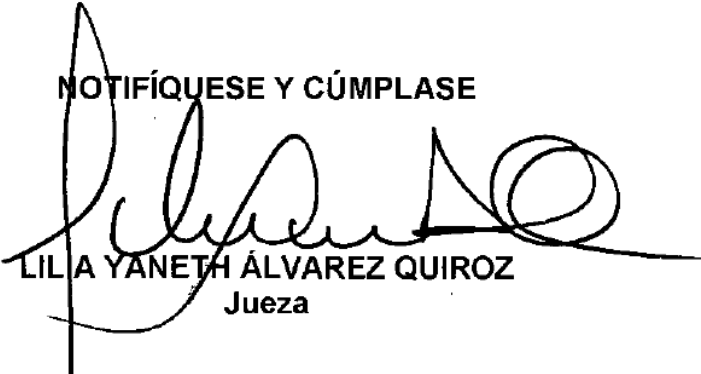
TERCERO: Una vez ejecutoriada esta sentencia, archívese el expediente.

CUARTO: Notifíquese esta sentencia conforme a lo dispuesto en el artículo 203 del C.P.A. y C.A.

QUINTO: Notifíquese personalmente el presente fallo a la señora procuradora delegada del Ministerio Público ante este Despacho.

SEXTO: Se ordena la expedición de copias que soliciten las partes conforme a lo previsto en el artículo 114 del C.G.P.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



LILA YANETH ÁLVAREZ QUIROZ
Jueza

ks